



Venezuela: diálogo a duras penas

Informe sobre América Latina N°59 | 16 de diciembre de 2016

Traducido del inglés

Headquarters

International Crisis Group

Avenue Louise 149 • 1050 Brussels, Belgium

Tel: +32 2 502 90 38 • Fax: +32 2 502 50 38

brussels@crisisgroup.org

Tabla de contenidos

Resumen Ejecutivo.....	i
Recomendaciones.....	iii
I. Introducción	1
II. La política envenenada.....	3
A. Cómo el gobierno abortó el referéndum por la revocatoria	3
B. La respuesta de la MUD.....	4
C. El dilema del diálogo.....	6
D. ¿Por qué no ha estallado el país?	7
III. Actores clave.....	10
A. Facciones políticas	10
B. Las fuerzas de seguridad y los paramilitares afines al gobierno	12
C. El sector privado	14
D. La comunidad internacional: facilitadores y críticos	15
IV. Perspectivas para 2017	18
A. La economía	18
B. La emergencia social.....	19
C. El chavismo después del 10 de enero	21
D. Perspectivas de una salida negociada.....	22
V. Conclusión	24
ANEXOS	
A. Mapa de Venezuela.....	25
B. Sobre el International Crisis Group	26
C. Informes e informes breves de Crisis Group sobre América Latina desde el 2013	27
D. Consejo de administración de Crisis Group.....	28

Resumen ejecutivo

Venezuela está sumida en un profundo conflicto político complicado en gran medida por una crisis económica y social de proporciones casi sin precedentes. A punto de comenzar su decimoctavo año en el poder, el gobierno chavista, ahora liderado por el presidente Nicolás Maduro, ha visto cómo se desplomaba su popularidad bajo los efectos de una economía que se ha estado contrayendo desde el 2014, con una tasa de inflación anual cercana al 1.000 por ciento. Los alimentos y otros bienes básicos a menudo son imposibles de obtener o están fuera del alcance de la mayoría. Sin embargo, la disminución de los ingresos derivados del petróleo, de los cuales el país depende, no han generado nuevos rumbos en las políticas públicas, sino una intensificación en los controles estatales, redoblando los ataques contra supuestos saboteadores de negocios y eliminado los canales constitucionales mediante los cuales una oposición política en ascenso podría disputarle su poder. A medida que se acerca el 2017, la parálisis política y la miseria económica presagian serias confrontaciones a no ser que las recientemente establecidas negociaciones con la oposición produzcan un rápido avance hacia la transición que Venezuela necesita para volver a las normas democráticas.

Tanto la creciente hostilidad política como el comienzo de las negociaciones se remontan al 20 de octubre, cuando el gobierno asestó un golpe mortal a la única vía electoral para salir del conflicto político en el corto plazo: un referéndum revocatorio contra el presidente Maduro, tal como dispone la Constitución. En respuesta a fallos dictados por cinco tribunales penales regionales, anunciados no por jueces sino por gobernadores estatales pertenecientes a la más dura del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió indefinidamente el proceso de referéndum. Esto sucedió a menos de tres meses del 10 de enero de 2017, fecha tras la cual un referéndum ya no desencadenaría elecciones presidenciales, incluso si fuera exitoso. La acción del CNE, controlado por el gobierno, prácticamente pone fin a la iniciativa.

La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) calificó a esto como un golpe de estado y anunció una ofensiva política en tres frentes. Redobló las acciones callejeras en un intento de forzar al gobierno a cambiar de opinión, mientras que en paralelo inició un procedimiento contra el presidente Maduro en la Asamblea Nacional. Asimismo, dijo que solicitaría a la Organización de Estados Americanos (OEA) que aplicara la Carta Democrática Interamericana, cuyos términos contemplan la posible suspensión de un Estado miembro.

Mientras las dos partes participan en un combate político, el malestar de la sociedad se ha intensificado. Cada vez cuesta más encontrar medicamentos vitales, y el servicio de salud está colapsando, causando miles de muertes innecesarias. La reacción del gobierno a la delincuencia violenta, que cobra más de 20.000 vidas al año, es de disparar a matar contra los supuestos delincuentes en combinación con redadas en barrios pobres por parte de las fuerzas de seguridad, dando lugar a acusaciones generalizadas de abusos de los derechos humanos. Últimamente, elementos de las fuerzas armadas han estado implicados en masacres, la más reciente de las cuales es el asesinato de más de una docena de jóvenes en la región de Barlovento, en el estado de Miranda.

Al negar el poder a la Asamblea Nacional electa y cancelar o suspender elecciones, el gobierno se arriesga a provocar más violencia política, aunque ese no es el único resultado posible. A pesar de sus debilidades, podría, bajo ciertas circunstancias, consolidarse como una dictadura militar de facto, por medio de elecciones fraudulentas o la total abolición de estas. Para salvar su democracia, Venezuela necesita negociar los términos de la transición con mediación externa, ya que ninguna institución doméstica cuenta con el respeto de ambas partes. Una abrupta transferencia de poder, incluso si fuera posible, podría provocar una grave inestabilidad y violencia.

Las negociaciones directas entre las dos partes, “acompañadas” por un enviado del Papa Francisco I y “facilitadas” por el ex primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero y dos expresidentes latinoamericanos, comenzaron a finales de octubre, pero su futuro pende de un hilo. Una serie de cambios de liderazgo a nivel nacional e internacional a principios de 2017, posiblemente incluida la presidencia venezolana, plantean tanto la posibilidad de avances sustanciales como la amenaza de una reacción violenta o autoritaria. El actual estancamiento clama por un enfoque basado en el diálogo, que idealmente lleve a una administración interina, multipartidista, que pueda hacer cumplir las medidas que se necesitan con urgencia. Se requiere un esfuerzo concertado por parte de todas las banderas políticas, pero también la comunidad internacional, en especial los gobiernos latinoamericanos, organizaciones regionales como UNASUR y la Organización de Estados Americanos, así como la Unión Europea (UE) y las Naciones Unidas, para aprovechar este periodo de incertidumbre para restaurar la democracia, el Estado de Derecho y la gobernanza económica responsable.

Recomendaciones

Para comenzar a restaurar el gobierno democrático, el bienestar económico y social y la estabilidad política

Al Gobierno:

1. Negociar con la oposición de buena fe para lograr un acuerdo que proporcione un calendario electoral claro, preferiblemente adelantando las elecciones presidenciales de diciembre del 2018; levantar las restricciones sobre la Asamblea Nacional; y disponer el nombramiento de jueces del Tribunal Supremo y miembros de la junta del CNE verdaderamente independientes y cualificados.
2. Eliminar las restricciones a la ayuda humanitaria por parte de donantes para aliviar el sufrimiento, sin esperar a alcanzar un acuerdo sobre una solución política a la crisis.
3. Fomentar la confianza en las negociaciones liberando a todos los presos políticos y retirando los cargos contra más de 2.000 activistas opositores, la mayoría de los cuales fueron arrestados por participar en manifestaciones contra el gobierno.
4. Aprovechar el acervo de conocimiento nacional e internacional en materia de economía para negociar con la oposición un plan de emergencia para contener la inflación y restaurar el poder adquisitivo de la moneda.
5. Reconsiderar urgentemente la política policial militarizada a la luz de los abusos demostrados y las ejecuciones extrajudiciales.

A la MUD y el liderazgo de la Asamblea Nacional:

6. Abstenerse de abandonar las negociaciones con el gobierno y hacer todo lo posible por encontrar una solución creativa y viable a la crisis mediante el establecimiento de un calendario electoral y una reforma económica.
7. Mantener el compromiso declarado con la protesta no violenta e intentar evitar el derramamiento de sangre en las manifestaciones.

Al Vaticano y otros facilitadores:

8. Apoyar y reforzar gradualmente la facilitación, presionando a ambas partes para que negocien de buena fe.
9. Insistir en la prestación de ayuda humanitaria, garantizando que no será usada para menoscabar al gobierno.

Al gobierno y la MUD conjuntamente:

10. Fortalecer el proceso de negociación aceptando los aportes de la sociedad civil y los procedimientos internacionales de verificación de los acuerdos; y estar abiertos a usar expertos técnicos externos para abordar los temas estancados.
11. Reforzar un plan de reforma económica e institucional acordado mediante arreglos para compartir el poder, incluida la participación de representantes de la oposición en un gobierno de unidad interino hasta que haya nuevas elecciones.

A los gobiernos regionales, EE.UU. y la Unión Europea (UE):

12. Apoyar el proceso de facilitación en las organizaciones regionales e internacionales, sobre todo la OEA y la ONU, y ofrecer servir de garantes y testigos y financiar la experticia técnica externa que se requiera para las negociaciones.
13. Instar a Venezuela a honrar sus compromisos bajo el derecho internacional y los tratados multilaterales en materia de democracia, Estado de Derecho y respeto por los derechos humanos, entre otras cosas mediante la activación de las disposiciones relevantes de la Carta Democrática y el Protocolo de Ushuaia de Mercosur.

Caracas/Bogotá/Bruselas, 16 de diciembre de 2016

Venezuela: diálogo a duras penas

I. Introducción

Venezuela, que ya era una democracia imperfecta cuando el actual régimen llegó al poder en 1999 al mando del fallecido presidente Hugo Chávez, ha estado deslizándose progresivamente hacia el autoritarismo. Tras la muerte de Chávez por un cáncer en 2013, la presidencia pasó a su sucesor elegido, Nicolás Maduro, quien logró una estrecha victoria electoral en abril de ese año. Maduro ha intensificado la represión a medida que ha disminuido su popularidad y profundizado la polarización política. La drástica caída del precio del petróleo, del que la economía depende casi por completo, ha expuesto fallas profundas en las políticas sociales y económicas que combinan controles draconianos de precios y tasas de cambio, y expropiaciones con altos niveles de corrupción y subsidios ineficaces a cambio de apoyo político. El resultado ha sido una escasez generalizada, hambre y enfermedad, con un correspondiente aumento del descontento popular y tensión política¹. Más de 40 personas murieron en 2014 durante varios meses de enfrentamientos callejeros entre las fuerzas de seguridad, partidarios del gobierno y una facción de la oposición. En el 2015, Caracas registró la tasa de homicidios más elevada de todas las ciudades del mundo².

Tras perder las elecciones parlamentarias en el 2015, el gobierno colmó el nominalmente autónomo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con partidarios incondicionales, y desde entonces lo ha usado para bloquear todas las leyes e iniciativas de la Asamblea Nacional, despojar a dicho organismo de sus facultades constitucionales de supervisión y control y, el 5 de septiembre de 2016, declarar todas sus acciones nulas y sin efecto³. El Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el gobierno, ha sido usado para postergar y en última instancia suspender un referéndum revocatorio a la presidencia de Maduro y para posponer al menos seis meses las elecciones para gobernadores estatales, que según la Constitución se deberían haber celebrado en diciembre. Las protestas se han confrontado con prohibiciones, retenes y represión policial, así como el despliegue de civiles armados que han golpeado y disparado contra los manifestantes. Los grupos de derechos humanos afirman que el gobierno retiene a más de 100 presos políticos, mientras que miles más están sujetos a diversas restricciones en su libertad.

¹ Para un relato del colapso del suministro de alimentos y servicios sanitarios, véase Crisis Group, Informe Breve sobre América Latina N°33, *Venezuela: un desastre evitable*, 30 de julio de 2015. El carácter cada vez más autoritario del régimen se aborda en los Informes Breves N°s 30, *Venezuela: punto de quiebre*, 21 de mayo de 2014; 31, *Venezuela: inercia peligrosa*, 23 de septiembre de 2014; y 34, *Fin de la hegemonía: ¿Qué sigue para Venezuela?*, 21 de diciembre de 2015.

² “The world’s most violent cities”, *The Economist*, 3 de febrero de 2016.

³ Véase Crisis Group, Informe Breve sobre América Latina N°35, *Venezuela: al borde del precipicio*, 23 de junio de 2016. El TSJ declaró a la Asamblea Nacional “en desacato” por su dictamen que a tres legisladores de la MUD del estado de Amazonas, acusados por el gobierno de fraude en las elecciones de 2015, se les debería impedir ocupar sus escaños mientras se estudian sus casos. Su ausencia priva a la oposición de una mayoría de dos tercios y la obliga a buscar el apoyo del gobierno, por ejemplo para designar a miembros de la junta del CNE.

En el marco de la investigación de este informe Crisis Group llevó a cabo más de 20 entrevistas en Caracas en los meses de octubre y noviembre, con participantes en el diálogo entre el gobierno y la oposición, analistas políticos y de seguridad, diplomáticos residentes en Venezuela, periodistas y representantes de la comunidad empresarial. Se hicieron esfuerzos por contactar a miembros del gobierno en ejercicio para escuchar sus interpretaciones de los eventos recientes, pero estos intentos fueron infructuosos.

II. La política envenenada

A. *Cómo el gobierno abortó el referéndum por la revocatoria*

Tras las elecciones parlamentarias y la instalación, el 5 de enero del 2016, de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD) debatió estrategias para lograr su objetivo prioritario de poner fin a la presidencia de Maduro, la cual de otro modo se prolongaría hasta enero del 2019. Cada estrategia tenía sus propios simpatizantes entre los cuatro principales partidos miembros del MUD; éstas incluían un referéndum revocatorio, una enmienda constitucional para reducir el mandato presidencial y la elección de una asamblea para reformar la constitución y renovar todos los poderes del Estado. Pero después de que el TSJ descartara la enmienda constitucional se impuso la opción del referéndum, favorecida por el ex candidato presidencial y gobernador estatal Henrique Capriles del partido Primero Justicia (PJ). La solicitud de referéndum fue presentada formalmente al CNE en marzo, lo que dejó unos nueve meses para que se convocara una votación que podría en principio terminar el mandato del gobierno⁴.

El gobierno sostuvo que no habría tiempo de celebrar el referéndum en el 2016. El CNE aplicó la interpretación más restrictiva y complicada de los reglamentos que gobiernan los referéndums e improvisó, sobre la marcha, nuevas reglas⁵. Se demoró casi dos meses simplemente para emitir los formularios oficiales en los que la MUD, en la etapa inicial, tenía que recolectar las firmas del 1 por ciento del electorado para obtener permiso para conseguir el 20 por ciento necesario para convocar un referéndum. Se recolectaron más de dos millones de firmas (diez veces el número requerido), pero el CNE rechazó, por diversas razones, 600.000. Páginas enteras de firmas fueron anuladas porque el nombre del presidente o la palabra “presidente” estaban mal escritos. Las firmas de aquellos que firmaron fuera de su propia circunscripción tampoco se contaron⁶. Aquellos cuyas firmas sí se tuvieron en cuenta tuvieron que

⁴ El artículo 72 de la Constitución estipula que cualquier funcionario electo puede ser sometido a un referéndum revocatorio a la mitad de su mandato, siempre y cuando el 20 por ciento de los votantes estén de acuerdo. El artículo 233 estipula que si el mandato del presidente es revocado “durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta complementar dicho periodo”. Maduro, elegido en abril del 2013, debería dejar el cargo en enero del 2019, dado que está completando el mandato de seis años de Chávez, que comenzó tres meses antes. Sin embargo, si un referéndum celebrado antes de enero del 2017 produjera un voto revocatorio, se tendrían que celebrar nuevas elecciones presidenciales antes de 30 días.

⁵ No se ha aprobado ninguna ley de referéndums, así que el proceso está regulado por el CNE, controlado por el gobierno, que aplica una serie de reglas establecidas en 2007 (“Normas para Regular el Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular”, Consejo Nacional Electoral Resolución 070906-2770, 18 de diciembre de 2007). Dichas normas requieren que los impulsores del referéndum primero obtengan firmas del 1 por ciento del electorado, para obtener permiso para recolectar el 20 por ciento. Sin embargo, el CNE añadió varios nuevos procedimientos que demoraron el proceso, incluida la digitalización de los formularios de firmas completados, una “comisión de verificación” dirigida por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la transcripción de los formularios y su consiguiente auditoría. José Ignacio Hernández, “8 violaciones del CNE a la Constitución en el trámite del revocatorio”, Prodavinci, 13 de mayo de 2016.

⁶ La lógica de esta regla, promulgada por el CNE después de que comenzara el proceso, es incierta, ya que el circuito electoral afectado por el referéndum corresponde a todo el país.

“validarlas” en centros designados por el CNE, usando equipos lectores de huellas dactilares.

Las autoridades electorales recurrieron a nuevas demoras y obstáculos⁷. El 22 de septiembre, el CNE anunció un cronograma que descartaba un referéndum revocatorio antes del final del primer trimestre del 2017, lo que impediría un cambio de gobierno. Asimismo, supeditó la convocatoria del referéndum a que la MUD lograra firmas no solo del 20 por ciento del electorado nacional, sino del 20 por ciento en cada uno de los 23 estados del país (más el Distrito Capital). Las fechas para recolectar el 20 por ciento eran del 26 al 28 de octubre.

El gobierno pudo haber calculado que la MUD abandonaría la campaña del referéndum antes de arriesgarse al fracaso de un proceso prolongado. Sin embargo, el gobierno de Maduro también desarrolló una estrategia paralela que involucraba a los tribunales. El presidente había nombrado a un líder político afín al gobierno, Jorge Rodríguez – alcalde de Caracas y antiguo miembro de la junta del CNE – para que encabezara el esfuerzo por impedir el referéndum. Él y otros afirmaron que las firmas rechazadas en la primera etapa eran evidencia de un “fraude masivo” y solicitaron al TSJ que bloqueara la totalidad del proceso y/o despojara a la MUD de su estatus legal. Por motivos que siguen sin estar claros, cinco tribunales penales regionales, y no el TSJ, emitieron la sentencia de “fraude” que llevó a la suspensión del referéndum. Cuando la MUD solicitó al TSJ que le permitiera recolectar firmas del 20 por ciento del electorado, la rama electoral de dicho tribunal rechazó la solicitud⁸.

B. *La respuesta de la MUD*

A la MUD le llevó varios días de debates y consultas internas responder al anuncio del cronograma del CNE el 22 de septiembre. El 26 de septiembre, declaró que consideraba que las condiciones eran inconstitucionales pero persistiría con su campaña por un referéndum, mientras que en paralelo, movilizaría protestas callejeras, actuaría en el parlamento y buscaría apoyo internacional⁹. Rechazó rotundamente que el requisito del 20 por ciento debiera aplicarse a cada estado, al igual que la postergación del referéndum hasta el 2017. Asimismo, anunció una protesta nacional para el 12 de octubre, que tomó la forma de un ensayo de los tres días de recolección de firmas previstos para el 26-28 de octubre. No obstante las respuestas de sus simpatizantes fueron tímidas.

El 23 de octubre, tras la suspensión del proceso de referéndum por parte del CNE, la Asamblea Nacional comenzó a debatir lo que la MUD denominó la “restauración de la constitución”. Otro de los temas de la agenda fue lo que se denominó de modo

⁷ El proceso de validación se fijó para el 20-24 de junio, pero cientos de miles de votantes fueron incapaces de cumplir con las reglas porque el CNE proporcionó solo 300 equipos lectores de huellas dactilares en todo el país, muchos de ellos en localidades alejadas de los centros de población donde residen la mayoría de los votantes de la oposición. Después el CNE se demoró hasta el 24 de agosto en reconocer que el objetivo del 1 por ciento se había cumplido, tras lo cual debería haber fijado la fecha para recolectar el 20 por ciento estipulado por la Constitución. Ya se había demorado 145 días en llegar a este punto, aunque un cálculo razonable sería solo de 41 días “CNE se tomó 141 días adicionales a los previstos para el análisis del 1% de las firmas”, *El Pitazo*, 3 de agosto de 2016.

⁸ “Sala electoral rechazó amparo que solicitaba reanudar recolección del 20%”, *Efecto Cocuyo*, 11 de noviembre del 2016.

⁹ “La respuesta de la MUD a las condiciones del CNE para la recolección del 20%”, *Tal Cual*, 26 de septiembre de 2016.

impreciso como un “juicio político” o “*impeachment*” de Maduro, aunque sin el apoyo de otras instituciones del Estado (todas controladas por el ejecutivo) la legislatura no cuenta con facultades constitucionales para remover al presidente. La MUD propuso declararlo “políticamente responsable” de la crisis, acusarlo de abandonar sus obligaciones e investigar acusaciones de que había nacido en Colombia, y por lo tanto no podía ser elegido presidente¹⁰. Durante el debate, simpatizantes del gobierno, algunos armados, irrumpieron en el recinto del edificio y con dificultad se les impidió entrar a la cámara legislativa. Algunos periodistas fueron atacados y robados¹¹. La multitud solo se retiró cuando así lo ordenó Jorge Rodríguez¹². El presidente dijo que le había sorprendido el incidente, pero los intrusos habían entrado “alegres, algunos de ellos bailando”, y su intención había sido asegurarse de que su voz fuera escuchada¹³.

En este contexto poco prometedor, y para sorpresa de muchos, el enviado del Vaticano Monseñor Emil Paul Tscherrig, nuncio en Argentina, anunció el 24 de octubre que “el diálogo nacional ha comenzado”. Una primera reunión entre el gobierno y la oposición, dijo, se celebraría en la Isla Margarita el 30 de octubre. El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chuo” Torrealba, confirmó esto, pero casi inmediatamente fue contradicho por varios líderes políticos de la MUD. Capriles dijo que se enteró del acuerdo “por televisión”, una afirmación que otras fuentes de la oposición han cuestionado fuertemente¹⁴. Tanto Capriles como Luis Florido, coordinador político nacional de Voluntad Popular (VP), dijeron que no estaban dadas las condiciones para un diálogo. Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, insistió que habría una reunión solo si la MUD en su conjunto estaba de acuerdo.

La MUD reiteró su llamado a las manifestaciones de protesta el 26 de octubre, pero se encontró claramente desequilibrada y pasó la semana después del anuncio del diálogo intentando recomponer su posición. Primero que todo insistió, en un intento de evitar sospechas de que estaba buscando negociar un acuerdo lejos de la mirada del público, que cualquier reunión se celebraría en Caracas. Las protestas previstas para mediados de la semana siguieron adelante como estaba previsto, aunque la concurrencia, si bien no fue insignificante, reflejó la confusión de los simpatizantes¹⁵. Las riñas continuaron hasta el último minuto, y los principales partidos de la oposición (los llamados G4) alcanzaron un acuerdo tan solo media hora antes del inicio del diálogo el 30 de octubre. VP se negó a participar, mientras que los otros tres par-

¹⁰ Los padres de Maduro eran colombianos. Él insiste en que nació en Venezuela, pero nunca ha presentado una partida de nacimiento. Él y otras personalidades del gobierno han dado cuatro versiones diferentes del lugar preciso de su nacimiento, lo que ha alimentado sospechas de que podría haber nacido en Colombia. El 28 de octubre, el TSJ dictaminó que el presidente es venezolano, con ninguna otra nacionalidad, y amenazó con iniciar acciones penales contra cualquiera que lo niegue. “TSJ confirma que Nicolás Maduro es venezolano y nació en La Candelaria”, Efecto Cocuyo, 28 de octubre de 2016. El artículo 227 de la Constitución estipula que un candidato presidencial debe ser venezolano de nacimiento y no poseer ninguna otra nacionalidad.

¹¹ “Toma por asalto a la Asamblea Nacional deja 6 violaciones a la libertad de expresión”, Espacio Público, 24 de octubre de 2016.

¹² Entrevista de Crisis Group, periodista, 24 de octubre de 2016.

¹³ “Maduro: Me sorprendió la gente alegre y bailando que entró al Parlamento”, 2001, 25 de octubre de 2016.

¹⁴ Entrevista de Crisis Group, analista político, 22 de noviembre de 2016.

¹⁵ La MUD afirmó que cientos de miles se habían presentado en Caracas, pero los informes policiales sugieren que no fueron más de 75.000.

tidos principales acordaron retirarse si no lograban las condiciones que VP exigía¹⁶. Quince partidos miembros más pequeños emitieron un comunicado en el que afirmaban que bajo las actuales condiciones el diálogo “no tiene sentido”, y exigían que la oposición estuviera representada no solo por el G4, sino también por otros líderes políticos y la sociedad civil¹⁷.

C. *El dilema del diálogo*

La MUD había insistido mucho en la participación del Vaticano en la facilitación liderada por Rodríguez Zapatero, el ex primer ministro español, cuyos miembros, a ojos de muchos opositores, eran demasiado cercanos al gobierno de Maduro¹⁸. El Vaticano había insistido que solo participaría si tanto el gobierno como la oposición lo solicitaban formalmente, y había una clara voluntad de ambos lados de negociar de buena fe¹⁹. He ahí la sorpresa cuando, aparentemente en contra de los consejos que estaba recibiendo de Caracas, su enviado anunció el inicio de las negociaciones²⁰. La impresión generalizada era que un papa latinoamericano, cuyo círculo íntimo incluye a personas con amplia experiencia en asuntos venezolanos, estaría en una buena posición para ayudar a dirigir al país hacia una solución negociada, pero el momento parecía desfavorable²¹. Mientras que la oposición necesitaba resultados inmediatos para mantener unida a su coalición, el gobierno parecía tener todos los incentivos para usar las negociaciones para debilitar la campaña de la MUD para revertir la decisión del referéndum y dilatarla hasta después del 10 de enero, fecha tras la cual un referéndum no produciría nuevas elecciones presidenciales.

Aparentemente frustrados por las vacilaciones de la MUD en torno a la participación, tanto el Vaticano como EE.UU. presionaron a la oposición para que no abandonara su compromiso con el diálogo. La Iglesia Venezolana advirtió que no se podría

¹⁶ “Voluntad Popular no asistió al encuentro del diálogo por considerar que no están dadas las condiciones y ratifica convocatoria en Unidad a Miraflores”, comunicado de prensa de VP, 30 de octubre del 2016.

¹⁷ “15 partidos de la MUD presentaron propuestas ante eventual diálogo”, *El Nacional*, 29 de octubre del 2016

¹⁸ Ewald Scharfenberg, “Capriles dice que Zapatero esta ‘descalificado’ para mediar en conflicto de Venezuela”, *El País Internacional*, 26 de junio del 2016.

¹⁹ El secretario de Estado del Vaticano Pietro Parolin respondió en una carta a mediados de septiembre a los pedidos de Ernesto Samper (secretario general de UNASUR y expresidente de Colombia) y a los facilitadores liderados por Zapatero, en la que decía que el Vaticano participaría si recibía “una invitación directa de las partes interesadas, una vez que hayan tomado la firme decisión de iniciar formalmente el diálogo”.

²⁰ Entrevista de Crisis Group con una fuente de alto nivel de la Iglesia, 4 de noviembre del 2016.

²¹ El principal “experto en Venezuela” en el Vaticano es el secretario de Estado Parolin, quien fue nuncio en Caracas (2009-2013) y ha mantenido estrechos contactos con el país. El recientemente elegido general de los jesuitas (la orden a la que pertenece el Papa Francisco) es un venezolano, Arturo Sosa. El mismo Papa tiene una larga amistad con el arzobispo de Mérida, Venezuela, Baltazar Porras, a quien recientemente nombró cardenal. Hay ciertas tensiones, no obstante, entre el Vaticano y la iglesia de Venezuela, a la cual el gobierno desde hace mucho tiempo percibe como “contrarrevolucionaria”. El otro cardenal de Venezuela, Jorge Urosa Sabino, es visto como un crítico del Papa. (Juan Francisco Alonzo, “El Cardenal Urosa Sabino no sigue los pasos del Papa Francisco”, *Tal Cual*, 9 de enero del 2016). Algunos en la oposición venezolana consideran que el papa es un comunista.

garantizar la participación del Papa si la oposición se retiraba²². Los líderes moderados de la MUD, muchos de los cuales tenían sus propias dudas acerca de la sensatez de negociar en ese momento, se vieron simultáneamente atacados por sus aliados más radicales y arrinconados por los facilitadores.

El 3 de noviembre, tras la primera sesión de diálogo, Maduro declaró públicamente que la oposición “ni con votos ni con balas entrarán más nunca en Miraflores”²³. Los primeros resultados – en particular el primer acuerdo sustantivo, anunciado tras la segunda sesión plenaria del 11 de noviembre – parecían confirmar los peores temores de los escépticos. Redactado en parte en un lenguaje que a ojos de muchos parecía una capitulación al gobierno, comprometía a la MUD a aceptar nuevas elecciones en las tres circunscripciones de Amazonas que están en el centro del fallo que promulgó el TSJ en septiembre, donde declaraba a la Asamblea Nacional en desacato y consecuentemente anulaba sus acciones, a cambio de ello el TSJ se comprometía a anular el fallo. Asimismo, se acordó que dos (de cinco) de los miembros de la junta del CNE cuyos mandatos finalizan en diciembre serían reemplazados, supuestamente de tal forma que se garantizara la neutralidad del organismo, y que los presos políticos (“personas detenidas”) serían liberados. Pero no se precisaron los detalles²⁴.

El problema se vio agravado por el hecho de que ambas partes dieron versiones contradictorias sobre lo que se había acordado. Un motivo de discordia, en particular dentro de la oposición, fue que no se hizo referencia a la cuestión del referéndum revocatorio o cualquier forma de elecciones anticipadas (las próximas elecciones presidenciales están previstas para diciembre del 2018). Para fines de noviembre esto aún no se había discutido formalmente en las negociaciones, a pesar de la afirmación pública de la MUD de que este era su principal objetivo.²⁵ El gobierno rechazó públicamente la idea.

D. *¿Por qué no ha estallado el país?*

A lo largo de los últimos dos años, los venezolanos han soportado el colapso casi sin precedentes de sus condiciones de vida. Tanto las protestas contra la escasez de alimentos, los deficientes servicios públicos como el agua y la electricidad y la delincuencia violenta, han aumentado drásticamente. En los primeros años del 2016, las protestas contra la escasez de alimentos aumentaron en un 320 por ciento comparado con el año anterior. Junio fue el mes pico, con 728, de las cuales 274 estuvieron relacionadas con alzas en los alimentos. Entre enero y octubre, hubo más de 700 incidentes de saqueo o intento de saqueo. El 14-15 de junio hubo un brote de saqueos

²² La conferencia de obispos de Venezuela emitió un duro comunicado el 30 de octubre en el que advertía contra abandonar el compromiso con el diálogo. Fuentes políticas y eclesíásticas mencionaron a Crisis Group la amenaza del Vaticano de retirarse, pero la Iglesia hizo hincapié en el compromiso del Papa con el éxito.

²³ Ibis León, “Maduro: Ni con votos ni con balas entrarán más nunca en Miraflores”, Efecto Cocuyo.com, 3 de noviembre del 2016. La referencia es al palacio presidencial de Miraflores. Más adelante, Maduro añadió que el diálogo debería continuar durante el 2017 y 2018.

²⁴ “Los cinco acuerdos del gobierno y la oposición tras la II reunión plenaria del Diálogo Nacional”, *Noticias 24*, 12 de noviembre del 2016. Sobre el fallo de desacato y la importancia de los tres escafíos en la Asamblea Nacional, véase la nota 3 al pie de página, arriba.

²⁵ Entrevista de Crisis Group, miembro del equipo de negociación de la MUD, 22 de noviembre del 2016.

particularmente violento y prolongado en la ciudad oriental de Cumaná, en el estado de Sucre. La respuesta de la policía y la Guardia Nacional dejó un saldo de dos muertos, dos docenas de heridos y varios cientos arrestados²⁶. Hubo mucha especulación acerca de si habría disturbios sociales a nivel nacional comparables al “Caracazo” de 1989, en el cual cientos fueron asesinados por las fuerzas de seguridad, lo que afectó profundamente a la política y sociedad a partir de entonces²⁷.

Sin embargo, los saqueos disminuyeron de un pico de 126 incidentes en junio a 58 en julio, y la tensión social se calmó levemente²⁸. Las protestas en general disminuyeron a 504 en octubre. Varios factores contribuyeron a esto. En el ámbito político, la movilización de la oposición en torno a la demanda de un referéndum revocatorio alivió algo de presión al ofrecer una posible salida a la crisis. Las muertes y lesiones entre los saqueadores pueden haber desincentivado a algunos manifestantes, pero probablemente el mayor impacto lo tuvieron dos iniciativas del gobierno: los controles fronterizos se relajaron – principalmente tras la normalización parcial de los cruces acordada con Colombia en agosto – lo que permitió a los individuos privados, compañías y entidades gubernamentales importar alimentos a precios de mercado²⁹, y en julio se tomó la decisión de desviar gran parte de la distribución de bienes básicos a precios controlados, de los supermercados (públicos y privados) al sistema de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)³⁰.

A través de los CLAP, gestionados por los militares y organizaciones civiles vinculadas al gobernante Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), los alimentos básicos son distribuidos directamente a consumidores de bajos ingresos a precios controlados. Si bien el alcance de los CLAP es limitado, son ineficaces y están plagados de corrupción, han tenido el efecto de reducir las filas en supermercados y abastos (un caldo de cultivo para el descontento popular) y de permitir a las autoridades usar los alimentos como una herramienta de control político al amenazar con negárselos a los disidentes³¹. El 4 de octubre, el presidente Maduro decretó que la mitad de los alimentos producidos deberían venderse al gobierno para su distribución por medio de los CLAP.

Las encuestas de opinión indican que estas medidas han hecho poco para restaurar la popularidad del gobierno, que sigue estando en niveles históricamente bajos para el chavismo, mientras que la oposición continúa ganando apoyo, incluso en antiguos bastiones del gobierno³². Sin embargo, el rechazo generalizado del gobierno

²⁶ Cifras del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (Radar de la Conflictividad); D. Iriarte, “Varios muertos y cuatrocientos detenidos por los saqueos en el nordeste de Venezuela”, *El Confidencial*, 16 de junio del 2016. El gobernador del estado de Sucre, Luis Acuña, negó que hubiera habido muertes y atribuyó los disturbios al “vandalismo...orquestado por la oposición”.

²⁷ Margarita López Maya, “The Venezuelan ‘Caracazo’ of 1989: Popular Protest and Institutional Weakness”, *Journal of Latin American Studies*, vol. 35, no. 1, febrero de 2003.

²⁸ Lorena Meléndez, “Saqueos de agosto de 2016 duplican la cifra de hace un año”, *Runrunes*, 18 de septiembre del 2016.

²⁹ “Colombia y Venezuela viven nuevos vientos”, *Revista Semana*, 13 de agosto del 2016. Anatoly Kurmanaev, “Venezuela backs away from price controls as citizens go hungry”, *The Wall Street Journal*, 14 de octubre del 2016.

³⁰ Para un relato oficial de este sistema, véase “¿Que son los CLAP?”, Instituto Nacional de Nutrición, Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, 6 de agosto del 2016.

³¹ Franz von Bergen, “La discriminación política opera en los CLAP al repartir alimentos”, *El Nacional*, 29 de mayo de 2016.

³² Entrevista de Crisis Group, experto en encuestas de opinión, 24 de noviembre del 2016.

no parece traducirse en una voluntad colectiva de derrocarlo mediante la movilización en masa. Por el contrario, los esfuerzos públicos han estado dirigidos principalmente a poner comida sobre la mesa. Un estudio reciente concluyó que el 36 por ciento de los venezolanos se han visto obligados a vender sus bienes personales para llegar a fin de mes³³.

³³ Mariana Zuñiga y Nick Miroff, "In a hungry Venezuela, buying too much food can get you arrested", *The Washington Post*, 15 de septiembre de 2016. Blanca Vera Azaf, "Dólar paralelo dispara por alza del gasto público y recorte en entrega de divisas", *El Nacional*, 30 de noviembre de 2016.

III. Actores clave

Resulta difícil comprender la dinámica de la crisis venezolana sin entender las divisiones internas de ambos lados del espectro político. Ni el gobierno ni la alianza opositora son bloques homogéneos. Aún dentro de algunos de los partidos miembros de la MUD hay diferencias significativas entre facciones que pueden afectar el comportamiento de toda la coalición. Dentro del gobierno, en particular las disputas en torno a la gestión de la economía han provocado una parálisis en la formulación de políticas, mientras que la oposición es tironeada en lo que en ocasiones parecen direcciones diametralmente opuestas por las que a menudo se describen como fuerzas “moderadas” (a favor del diálogo) y “radicales” (más agresivas). Esta sección ofrece una guía tentativa a algunas de las divisiones y facciones que marcan el rumbo de la estrategia del gobierno y la oposición, aunque en lo que respecta al gobierno hay insuficiente información verificable que pudiera permitir un mapeo más preciso de las alianzas.

A. Facciones políticas

La MUD es una coalición heterogénea, actualmente formada por 21 partidos. Tiene un sólido historial como alianza electoral, pero por otro lado tiene grandes dificultades para mantener la unidad. Ningún partido tiene la fuerza necesaria para imponer su estrategia, y la rivalidad entre líderes con aspiraciones presidenciales complica enormemente su cohesión³⁴. Las decisiones diarias las toma el G4, compuesto por los cuatro principales partidos opositores en el parlamento. En orden de tamaño, estos son Primero Justicia (PJ, 33 escaños), Acción Democrática (AD, 26), Un Nuevo Tiempo (UNT, 20) y Voluntad Popular (VP, 15). De estos, VP – que lideró las protestas callejeras de La Salida en el 2014 y cuyo líder, Leopoldo López, está cumpliendo una sentencia de 14 años de cárcel por instigarlas – es el más inclinado a dirigir la acción y el menos convencido con las actuales negociaciones³⁵. UNT es el que más consistentemente actúa a favor del diálogo, junto con Avanzada Progresista, liderado por el gobernador del estado Lara, Henri Falcón³⁶. PJ por lo general está a favor del diálogo, pero Capriles, (dos veces candidato presidencial de la MUD y actual gobernador de PJ del importante estado de Miranda) se ha mostrado impaciente con las negociaciones e incluso ha hablado de una marcha al palacio presidencial.

Los restantes partidos miembro han formado un frente común para exigir mayor participación y criticar el manejo del diálogo. Dentro de éstos, Vente Venezuela, liderado por la ex miembro de la Asamblea Nacional María Corina Machado, es el más vehemente en sus críticas al gobierno. El 11 de noviembre estos partidos publicaron una carta abierta al Vaticano en la que acusaban al gobierno de usar las negocia-

³⁴ Cuatro potenciales candidatos lideran las encuestas de opinión: Henrique Capriles (PJ), Leopoldo López (VP), Henri Falcón (Avanzada Progresista) y Henry Ramos Allup (AD).

³⁵ Los otros principales líderes de “La Salida” fueron Antonio Ledezma (Alianza Bravo Pueblo), alcalde de la Gran Caracas (actualmente bajo arresto domiciliario), y María Corina Machado (Vente Venezuela). Para un relato de este periodo, véase Crisis Group, Informe Breve sobre América Latina, *Venezuela: punto de quiebre*, op. cit.

³⁶ Si bien el pequeño partido de Falcón no pertenece al G4, su estatus como personalidad nacional y su firme postura a favor del diálogo le otorgan influencia en las negociaciones.

ciones para apaciguar la disidencia y exigían el referéndum. La sociedad civil también ha pedido un papel más prominente y ha criticado el desempeño de la MUD³⁷.

El único gran partido del gobierno es el PSUV, fundado por Chávez en el 2008. Varios partidos más pequeños, incluido el Partido Comunista de Venezuela (PCV), están aliados con el PSUV en el Gran Polo Patriótico (GPP). Al igual que los pequeños partidos de la oposición, se quejan de que no se les tiene en cuenta. El PCV ha hablado del peligro de que el diálogo pueda llevar a un “nuevo pacto” de élites³⁸. Ex miembros disidentes del PSUV agrupados en el movimiento Marea Socialista asimismo sostienen que el diálogo es una estrategia para restaurar un duopolio bipartidista³⁹. Muchos analistas consideran que el propio PSUV, que en efecto tiene alas civiles y militares (a pesar de la prohibición constitucional de la participación de militares activos en la política), está dividido en facciones, aunque la membresía exacta y opiniones de estas son objeto de disputa. Al menos hasta el 10 de enero del 2017, el apoyo aparente por parte de todas las facciones del chavismo al presidente Maduro es sine qua non, dado que su salida anticipada desencadenaría elecciones presidenciales inmediatas y casi inevitablemente la derrota del partido en su conjunto. Esto ha tendido a oscurecer las diferencias entre las facciones y las ambiciones de sus líderes.

Diosdado Cabello, capitán del ejército, ex presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente del PSUV, mantiene una posición de línea muy dura. Ignorado por Chávez a favor de Maduro como su sucesor, cuenta con el apoyo de algunos elementos de las fuerzas armadas, y tiene un poder considerable⁴⁰. Su hermano, José David, dirige el servicio de impuestos internos, el Seniat.

Varios altos mandos militares han sido incluidos en la lista negra de EE.UU. por supuestos vínculos con el narcotráfico y otras formas de crimen organizado. Esto es un factor que complica cualquier potencial transición, dado que, ante la posibilidad de ser encarcelados si perdieran el poder, tienen escasos incentivos para permitir un cambio de gobierno y poseen los medios para frustrarlo⁴¹.

³⁷ “Grupo de 15 partidos de la MUD agradece intercesión del Vaticano en el dialogo”, 2001, 11 de noviembre de 2016. “Una Propuesta Ciudadana”, Pronunciamiento de la Sociedad Civil, 22 de noviembre de 2016.

³⁸ “PCV alerta que dialogo puede ser nuevo pacto de las élites”, *Tribuna Popular*, 11 de noviembre de 2016.

³⁹ Entrevista de Crisis Group, miembro de Marea Socialista, 24 de noviembre de 2016.

⁴⁰ Para un relato de cómo las diversas facciones del gobierno se dividieron el poder tras la ascensión de Maduro, véase Gloria Bastidas, “El Mapa del Poder de las tribus chavistas”, *Konzapata.com*, 4 de junio del 2014.

⁴¹ El general Néstor Reverol, comandante de la Guardia Nacional y exdirector de la agencia anti-drogas, cuya candidatura al ministerio de Defensa se vio frustrada unos meses antes en el 2016, cuando el general en jefe Vladimir Padrino López fue designado nuevamente, fue nombrado ministro de Interior inmediatamente después de ser acusado de delitos de narcotráfico por un tribunal estadounidense. “Maduro promotes Venezuelan general indicted on drug charges in US”, *The Guardian*, 3 de agosto de 2016. “Former top leaders of Venezuela’s anti-narcotics agency indicted for trafficking drugs to the United States”, *The United States Attorney’s Office Eastern District of New York*, 1 de agosto del 2016.

B. *Las fuerzas de seguridad y los paramilitares afines al gobierno*

Durante la mayor parte de su historia, Venezuela ha estado gobernada por regímenes militares. Ha habido frecuentes golpes de estado e intentos de golpe (los más recientes en el 2002 y en 1992). El presidente Chávez (1999-2013) describió su gobierno como una “alianza cívico-militar” y bajo Maduro, su sucesor escogido, la presencia militar ha ido en aumento. En diciembre del 2015, Maduro dijo que había llegado el momento de que los militares “regresen a los cuarteles”, pero ha ocurrido lo contrario⁴². Un decreto presidencial del 10 de febrero creó Camimpeg, una corporación militar con derecho a operar en la minería, el petróleo y el gas. El 9 de julio, Maduro creó la Zona Económica Militar Socialista, sumando seis otras compañías en ámbitos tan diversos como las finanzas y la construcción. Las fuerzas armadas también controlan un banco, cadenas de televisión y radio, empresas agroalimentarias, una compañía de transportes y una planta de ensamblaje de vehículos.

Durante más de dos años, el ministro de Defensa, el general Padrino López, también ha sido comandante operacional de las Fuerzas Armadas (FANB). El 11 de julio, fue nombrado al frente de la recién creada “Gran Misión Abastecimiento Soberano” que otorgó a los militares un control sin precedentes del suministro de alimentos, justo en el momento en que las protestas por los alimentos amenazaban con descontrolarse por completo. El hecho de que lleve tanto tiempo en una posición de poder sugiere que cuenta con el respaldo de la mayoría de los altos cargos, al menos en el ejército, el más importante de los cuatro elementos de las FANB⁴³. Pero debe retirarse del servicio activo en el 2017⁴⁴. No está claro quién podría reemplazarlo y si los dos cargos seguirán siendo ocupados por la misma persona, o si Padrino López podría permanecer en algún cargo. Es probable que las fuerzas armadas jueguen un papel decisivo a la hora de determinar si Maduro es reemplazado, y si es así por quién. Pero sus opiniones, individual y colectivamente, son casi imposibles de determinar desde afuera⁴⁵. Lo que está claro es que un grupo de élite en lo más alto de las FANB tiene un gran interés en controlar cualquier transición para preservar sus intereses, incluida su participación en empresas y la integridad de su institución.

Si el malestar popular y/o protestas callejeras lideradas por los políticos opositores amenazarán la supervivencia del régimen, sobrepasando la capacidad de la Guardia Nacional y los escuadrones policiales antimotines para contenerlas, el ejército sería la última línea de defensa. Sus unidades han sido entrenadas en el control de motines, y las normas de combate permiten el uso de fuerza letal contra manifestantes bajo ciertas circunstancias. Supuestamente se ha adquirido abundante ma-

⁴² Franz von Bergen, “Militares controlan más ministerios con Maduro que con Chávez”, *El Nacional*, 25 de octubre de 2015. Tras la muerte de Chávez, el “Comando Político-Militar de la Revolución”, que no tiene carácter constitucional y cuya composición exacta sigue siendo incierta, surgió como la aparente encarnación de una nueva autoridad colegiada dentro de la “revolución”. Sofía Nederr, “Ordenan que militares en cargos públicos regresen a los cuarteles”, *El Nacional*, 12 de diciembre de 2015.

⁴³ Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Guardia Nacional. El quinto elemento, la Milicia Bolivariana, cuyo comandante general informa directamente al presidente, no tiene carácter constitucional.

⁴⁴ Estaba previsto que se retirara en julio del 2016, pero la fecha fue inesperadamente extendida. Pedro Pablo Peñaloza, “Padrino López el superministro militar del gobierno de Maduro”, *Univision*, 13 de julio de 2016.

⁴⁵ Entrevista de Crisis Group, especialista en defensa y seguridad, Caracas, 21 de noviembre de 2016.

terial antimotines de China durante este año⁴⁶. Pero muchos expertos en defensa dudan de la voluntad del ejército en su conjunto de disparar contra multitudes desarmadas.

Dicha tarea probablemente correspondería, en primera instancia, a lo que se suelen llamar “colectivos”, civiles armados chavistas, a menudo en motocicletas, cuya subordinación al gobierno no es reconocida y quienes ha demostrado tener pocos escrúpulos⁴⁷. Hay media docena de estos grupos, que exhiben abiertamente armamento militar, localizados en las inmediaciones del palacio presidencial. Si bien su despliegue en Caracas por lo general está restringido a los barrios pobres al oeste del palacio, con incursiones ocasionales contra la oposición, a menudo los colectivos han atacado manifestaciones de la oposición en otras partes de Venezuela. El 26 de octubre, cuando transcurría pacíficamente una marcha masiva en la capital, paramilitares del gobierno atacaron manifestaciones similares en al menos cinco ciudades. Según informes, dispararon e hirieron a cuatro manifestantes en Maracaibo. La Milicia Nacional Bolivariana, una fuerza militar creada en el 2007 que responde al presidente y tiene presencia nacional, también podría ser desplegada para controlar las protestas de la oposición.

Las inquietudes en torno a la represión violenta han aumentado ante los indicios crecientes de masacres y otros abusos por parte de las fuerzas de seguridad, en particular en operaciones conjuntas contra supuestos grupos criminales. Las “Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP) comenzaron en el 2015 en respuesta a la proliferación de “megabandas”, con docenas, incluso cientos de delincuentes fuertemente armados controlando extensas áreas del campo o barrios urbanos enteros. Según el gobierno, no son simples manifestaciones del crimen organizado, sino parte de una guerra librada por la oposición y sus aliados extranjeros⁴⁸. Las OLP, afirmó un defensor de los derechos humanos, emplean la “lógica de la guerra”⁴⁹. Se valen de unidades conjuntas militares y policiales, fuertemente armadas y con vehículos blindados. Según la organización venezolana de derechos humanos PROVEA, 850 personas han sido asesinadas en las OLP, y 18.000 hogares allanados sin orden judicial. El gobierno también tiene una política de desalojar familias de viviendas públicas cuyos miembros son sospechosos de actividades delictivas. A la fecha se estima que 1.500 familias han sido desalojadas⁵⁰.

En noviembre del 2016, once soldados, entre ellos un teniente coronel, fueron acusados de asesinar y descuartizar a más de una docena de jóvenes en la región de

⁴⁶ Juan Manuel Rafalli, “5 claves para entender la Resolución No. 008610 del Ministerio de la Defensa”, *prodavinci.com*, 30 de enero de 2015. Entrevista de Crisis Group, especialista en defensa y seguridad, Caracas, 21 de noviembre de 2016.

⁴⁷ Para una descripción más detallada de los orígenes y características de los “colectivos”, véase Crisis Group, Informe sobre América Latina N°38, *Violencia y política en Venezuela*, 17 de agosto de 2011.

⁴⁸ Entrevista de Crisis Group, experto en seguridad ciudadana, 25 de noviembre del 2016. “Operación Liberación y Protección del Pueblo: análisis de fondo”, Misión Verdad, 15 de julio del 2015.

⁴⁹ Inti Rodríguez, coordinador, PROVEA, 30 de noviembre del 2016 en Unión Radio.

⁵⁰ Véase “Unchecked Power: police and military raids on poor and immigrant neighbourhoods in Venezuela”, PROVEA y Human Rights Watch, abril de 2016. El 27 de julio de 2015, Maduro dijo, “a los que quieran utilizar las casas de la Gran Misión Vivienda para atracar, bacheaquear y para el narcotráfico se los voy a quitar”.

Barlovento, en el estado de Miranda, durante una OLP⁵¹. Los cuerpos fueron hallados en fosas comunes, y al menos otras cinco posibles víctimas estaban desaparecidas, afirmó el defensor del pueblo. Los asesinatos sucedieron poco después del asesinato de nueve pescadores en Cariaco, en el estado de Sucre, en una masacre atribuida a la Guardia Nacional⁵². Los asesinatos a esta escala son en gran medida una consecuencia de la militarización de la policía y la impunidad que acompaña a la identificación entre el gobierno y las fuerzas de seguridad. En septiembre, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue “reestructurada” y se le dio un uniforme de estilo militar, azul, de camuflaje urbano, con una boina roja (un emblema del chavismo). El director de la PNB y el ministro de Interior a quien responde son oficiales militares. Maduro dijo que la tarea de esta policía “socialista” es “combatir los antivalores que el capitalismo ha incubado”. Los mecanismos legales para ejercer un control civil y democrático sobre las fuerzas de seguridad han sido desmantelados⁵³.

C. *El sector privado*

Cuando Chávez fue brevemente derrocado en abril del 2002, la principal confederación de empleadores, Fedecámaras, jugó un papel importante. Su entonces presidente, Pedro Carmona, se autoproclamó presidente de facto, con el respaldo de algunos generales. Las relaciones entre el gobierno y el sector privado, que ya eran extremadamente tensas, han sido abiertamente hostiles desde entonces, a pesar del diálogo ocasional. El gobierno insiste que sus problemas económicos se deben a una “guerra económica” librada por el capital privado en alianza con la MUD y aliados extranjeros, en especial EE.UU. Pero hoy en día Fedecámaras evita involucrarse en la política en la medida de lo posible. Los líderes empresariales evitan hacer comentarios públicos sobre cuestiones políticas. La mayor corporación privada, Empresas Polar, que produce muchos alimentos básicos, ha sufrido acoso. A su presidente, Lorenzo Mendoza, recientemente se le impidió salir del país, fue amenazado de cárcel y tuvo a la agencia de inteligencia, Sebin, en la puerta de su casa durante varios días. Maduro afirmó, sin presentar pruebas, que Mendoza quiere ser presidente⁵⁴.

Una de las armas más eficaces del gobierno han sido los controles cambiarios en vigor desde el 2003. Si bien fueron originalmente introducidos para contener la fuga de capitales tras una caída en las reservas internacionales causada por el lockout de la industria petrolera por parte de la oposición, se han mantenido por motivos políticos, como ha reconocido el vicepresidente Aristóbulo Istúriz. “Si quitamos el control de cambio nos tumban”, dijo⁵⁵. El gobierno tiene el monopolio casi total de las divisas extranjeras, las cuales dispensa con una absoluta falta de transparencia⁵⁶.

⁵¹ “¿Que pasó en Barlovento? La masacre. Las víctimas. Las reacciones,” *prodavinci.com*, 28 de noviembre de 2016. “Antillano: ‘El gobierno está secuestrado por los cuerpos de seguridad’”, *Su-puesto Negado*, 1 de diciembre de 2016. Para mediados de diciembre, 12 miembros del ejército habían sido acusados por fiscales del estado de participar en la masacre.

⁵² Ronny Rodríguez Rosas, “Van cinco personas detenidas por vinculación con la masacre de Cariaco”, *Efecto Cocuyo*, 24 de noviembre de 2016.

⁵³ Marcos Tarre Briceño, “Corrupción policial en Venezuela”, *El Nacional*, 1 de mayo de 2016.

⁵⁴ “Maduro arremetió contra Lorenzo Mendoza”, *El Nacional*, 11 de agosto de 2015.

⁵⁵ “Aristóbulo Istúriz: El control de cambio en Venezuela es una medida política, no económica”, *El Nacional*, 11 de octubre de 2016.

⁵⁶ Esto ha redundado en una grave corrupción. La presidenta del Banco Central Edmée Betancourt dijo en el 2013 que unos \$20 mil millones habían sido malversados en un fraude cambiario en el

Existen dos tipos de cambio oficial: la tasa Dipro para alimentos medicamentos y otros bienes esenciales (Bs 10:\$1) y una tasa variable conocida como Dicom o Simadi (Bs 665:\$1 a mediados de diciembre) para todo lo demás. No hay información pública acerca de quienes reciben divisas o los criterios según los cuales se asignan. Las empresas privadas dicen que se ven obligadas a lidiar con intermediarios con acceso a las tasas subvencionadas para comprar cualquier artículo importado. Los intermediarios cobran la tasa paralela, que actualmente oscila en torno a los Bs 4,000:\$1⁵⁷.

El número de empresas privadas se ha reducido drásticamente desde que Chávez llegó al poder en 1999. La federación de empleadores industriales, Conindustria, estima que unas 8.000 empresas manufactureras, alrededor de dos tercios del total, han cerrado desde entonces⁵⁸. El gobierno expropió alrededor de cuatro millones de hectáreas de tierras agrícolas, así como alrededor de 500 empresas agroalimentarias, la mayoría de las cuales producen una fracción de lo que solían producir. Gracias a los controles en los precios de los alimentos y otros artículos básicos, muchas empresas se ven obligadas a vender su producción a precios inferiores a los de costo, y el sector minorista también ha sido duramente golpeado. Durante unos meses en el 2016, las empresas podían importar alimentos y venderlos a precios de mercado, pero el súbito aumento en la tasa del dólar “paralelo” en noviembre frenó ese comercio, puesto que las empresas ya no podían calcular el precio de remplazar los bienes que vendían⁵⁹.

Sin la ayuda del sector privado, al gobierno le resultará imposible resolver la escasez y la inflación. A pesar de una plétora de iniciativas bajo Maduro destinadas a alcanzar un acuerdo con los líderes empresariales, no ha surgido nada concreto, y los problemas subyacentes se mantienen intactos.

D. *La comunidad internacional: facilitadores y críticos*

En el apogeo de los enfrentamientos callejeros del 2014, el gobierno y la oposición mantuvieron breves negociaciones fomentadas por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y facilitadas por los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil, Colombia y Ecuador, así como el nuncio papal en Caracas, Monseñor Aldo Giordano. Si bien las negociaciones no dieron fruto, establecieron a UNASUR y su secretario general, Ernesto Samper, como potenciales facilitadores en futuros conflictos venezolanos, a pesar de los reparos de la MUD, que veía a la organización como una aliada del gobierno. El gobierno consideraba a la Organización de Estados Americanos (OEA) como una reliquia del colonialismo dominada por EE.UU. Si bien su secretario general, Luis Almagro, había recibido el apoyo de Venezuela a su candidatura, se convirtió en un crítico vehemente y locuaz de Caracas, lo que hizo que su participación en cualquier facilitación fuera muy improbable.

2012. Fue destituida casi inmediatamente después de su declaración; no hubo ninguna investigación pública. “Presidenta del BCV: Parte de los \$59.000 millones entregados en 2012 fueron a ‘empresas de maletín’”, *aporrea.org*, 24 de mayo del 2013.

⁵⁷ Entrevista de Crisis Group, representante de empresa manufacturera, Caracas, 24 de noviembre de 2016.

⁵⁸ Luis Oberto, “Conindustria: 8,000 empresas han bajado sus santamarías”, *El Nacional*, 16 de mayo de 2016.

⁵⁹ Blanca Vera Azaf, “Dólar paralelo se dispara por alza del gasto público y recorte en entrega de divisas”, *El Nacional*, 30 de noviembre de 2016.

UNASUR fue una de las pocas organizaciones internacionales que aceptaron las restrictivas condiciones del gobierno para observar (“acompañar” fue el término oficial) las elecciones legislativas del 6 de diciembre. Incapaz de lograr un consenso para elegir a un jefe de delegación suramericano, optó por Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana. Entre los observadores internacionales también estaban el ex primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero y el expresidente panameño Martín Torrijos. A medida que el conflicto subía de tono tras la victoria de la MUD, estos tres – liderados por el español – comenzaron a intentar acercar a las partes. El 19 de mayo, la MUD se reunió con Zapatero en Caracas, y más adelante ese mes los tres facilitadores se reunieron con ambas partes en la República Dominicana. Después de que el gobierno divulgara esta información, la MUD se vio obligada a negar que hubiera habido negociaciones cara a cara. Emitió una declaración en la que esbozaba tres principales demandas: la liberación de los presos políticos y el fin de la persecución política; el fin de la prohibición de la ayuda internacional humanitaria; y el respeto de la separación de poderes⁶⁰.

Si bien se mantuvo el contacto durante los meses posteriores, y Zapatero se desplazó frecuentemente entre Madrid y Caracas, no se lograron avances sustanciales. No obstante, la iniciativa de Zapatero fue respaldada por la mayoría de los principales actores internacionales, incluido el Departamento de Estado de EE.UU., el Consejo Permanente de la OEA, la Unión Europea (UE) y el Vaticano. Los intentos de Almagro, secretario general de la OEA, de insistir en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana no prosperaron, pero había claros indicios de que la reputación del gobierno de Maduro en la región había caído drásticamente. El bloque comercial de Mercosur se negó a permitir que Venezuela asumiera la presidencia rotativa de la organización en junio del 2016, y en diciembre su membresía fue suspendida por no adaptar sus reglamentos a las normas del Mercosur⁶¹. En agosto, quince Estados miembros de la OEA firmaron una declaración en la que no solo llamaban al diálogo, sino que también instaban al CNE a completar “sin demora” las etapas restantes del proceso de referéndum revocatorio⁶².

Tres aliados claves de Venezuela, dos de ellos con asientos permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU, podrían potencialmente desempeñar un papel positivo, pero se han negado, al menos en público, a dar un paso al frente. La Rusia de Vladimir Putin, que ha sido uno de los principales proveedores de armas a Venezuela, ha expresado su apoyo por el diálogo, pero ha advertido contra la “interfe-

⁶⁰ “MUD emite comunicado sobre reunión en República Dominicana para impulsar diálogo nacional”, *Noticia al Día*, 28 de mayo de 2016. El comunicado de la MUD insistió que no había contradicción alguna entre buscar el diálogo y buscar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en la OEA, afirmando que el diálogo sería imposible sin presión internacional. Sin embargo, los principales partidarios del diálogo dentro de la MUD (quienes contactaron a Zapatero en primer lugar) se oponían a la aplicación de la Carta; sus más fervientes partidarios eran los más escépticos del diálogo. Entrevista de Crisis Group, líderes opositores y analistas políticos, noviembre de 2016.

⁶¹ “El Mercosur suspende a Venezuela por incumplir los acuerdos de adhesión”, *Agence France-Presse*, 1 de diciembre de 2016. Uruguay se ha resistido a las iniciativas de los otros tres miembros (Argentina, Brasil y Paraguay) de pedir cuentas a Venezuela bajo los términos del protocolo de Ushuaia, el cual exige que los miembros de Mercosur se adhieran a las normas democráticas. El resultado bastante insatisfactorio ha sido una suspensión de la membresía de Venezuela que en sí misma parece violar las normas de la organización.

⁶² “Este es el comunicado firmado por 15 países miembros de la OEA sobre Venezuela y el revocatorio”, *prodavinci.com*, 11 de agosto de 2016.

rencia” de EE.UU. A principios de diciembre, Maduro anunció que en el 2017 Rusia suministraría “toda la harina” que Venezuela necesitara para superar el “sabotaje” económico, así como equipamiento militar, incluido un sistema de defensa antimisiles. A los chinos les preocupan principalmente los \$20 mil millones que les debe el gobierno, y probablemente actúen de forma pragmática. Cuba ha mantenido la retórica de la “solidaridad revolucionaria” pero a medida que disminuye la capacidad de Venezuela de subsidiar su consumo energético y proporcionar dinero en efectivo, hay por lo menos una posibilidad de que contribuya a una solución creativa.

IV. Perspectivas para 2017

Venezuela comenzó el 2016 con esperanzas de que la aplastante victoria de la oposición en las elecciones legislativas de diciembre del 2015 pudiera traer consigo negociaciones constructivas entre el gobierno y la oposición, que llevaran a una solución pacífica y democrática de la profunda crisis económica y social. Pero la decisión del gobierno de usar su control de los tribunales y la autoridad electoral para dejar al parlamento impotente y bloquear la campaña de la MUD por un referéndum revocatorio ha agravado las tendencias autoritarias del gobierno y la indignación de la oposición.

Es difícil prever con precisión cómo se desarrollará esto en el 2017, aunque algunas cosas ya están claras. La economía va camino a la hiperinflación y a niveles de escasez que eclipsarán los del 2016. No se puede descartar un caótico default de la deuda externa. En el ámbito político, la posición de Maduro será más débil después del 10 de enero, ya que su salida, por el motivo que fuera, podría suceder sin provocar la caída del gobierno. Esto podría dar lugar a luchas faccionales a medida que grupos dentro del régimen compitan por sucederlo. La nueva administración de Trump en EE.UU. es una incógnita. La crucial relación simbiótica entre La Habana y Caracas podría sufrir cambios tras la muerte de Fidel Castro. Tanto la ONU como UNASUR tendrán un nuevo liderazgo⁶³. Si prevalece el ala más dura, las negociaciones entre el gobierno y la oposición se vendrán abajo, y la violencia y/o un gobierno abiertamente dictatorial serán más probables. La moderación mutua es esencial, aun cuando la polarización y los problemas económicos de Venezuela hacen que parezca improbable.

A. La economía

Tan solo en el mes de noviembre, el bolívar perdió alrededor de dos tercios de su valor en el libre mercado, cayendo de Bs 1.501,17:\$1 a más de Bs 4.500:\$1⁶⁴. El gobierno no ha publicado las cifras de la inflación desde diciembre del 2015, pero la mayoría de los economistas coinciden en que el país va camino a la hiperinflación⁶⁵. Los billetes nuevos, prometidos para mediados de diciembre, incluyen un billete de Bs 20.000: el anterior billete de más alta denominación en circulación – Bs 100 – fue retirado de la circulación con 72 horas de aviso. La medida, supuestamente dirigida a combatir las “mafias” del cambio, provocó el caos en una economía que ya sufría una grave falta de liquidez⁶⁶.

La economía venezolana se ha estado contrayendo durante los últimos diez trimestres, y según el Fondo Monetario Internacional es probable que se contraiga en

⁶³ Samper perdió apoyo entre los Estados miembros como resultado de los cambios de gobierno en Argentina y Brasil en particular. A mediados de 2016, anunció que no se presentaría para un segundo mandato como secretario general, pero permanecería en el cargo hasta principios de 2017, mientras se buscaba su reemplazo.

⁶⁴ Datos obtenidos de la página web DolarToday, cuyas cifras son ampliamente utilizadas para negociar en el mercado negro. La tasa oficial más elevada es Bs 10:\$1, la más baja Bs 665:\$1.

⁶⁵ Roberto Deniz, “5 síntomas de que Venezuela tiene hiper-inflación”, Runrunes, 10 de agosto de 2016.

⁶⁶ “Rechazo e incertidumbre produce anuncio de sacar de circulación billetes de 100 bolívares”, Runrunes, 11 de diciembre de 2016.

otro 4,5 por ciento en el 2017⁶⁷. Con la incapacidad de la producción doméstica de casi todos los bienes básicos de satisfacer incluso la demanda reducida por una profunda inflación, hay una necesidad urgente de importaciones para cubrir el déficit, en especial de bienes vitales como alimentos y medicamentos. Pero Venezuela depende en aproximadamente un 96 por ciento de los ingresos del petróleo para producir las divisas necesarias; el precio internacional del crudo es un 60 por ciento inferior al promedio de 2012 de \$103,42/barril, y en consecuencia las importaciones han disminuido. En mayo, el ministro de Economía Miguel Pérez Abad dijo que habría \$15 mil millones disponibles para las importaciones en el 2016, comparado con más de \$50 mil en el 2012⁶⁸.

A partir del 2004, Chávez comenzó a saquear las reservas del Banco Central para financiar el déficit del sector público, lo que violaba la Constitución. En el 2005, el gobierno determinó que podía disponer de las reservas que superaran lo que consideraba el “nivel óptimo” de \$26,8 mil millones. Para fines de octubre del 2016, las reservas estaban en menos de \$11 mil millones, tras haber caído en alrededor de \$5,5 mil millones desde el comienzo del año. Además de financiar importaciones esenciales, el gobierno necesita más de \$9 mil millones en el 2017 para hacer frente a los pagos de la deuda externa. Un canje de bonos realizado en octubre para aliviar la presión ampliando los plazos solo tuvo un éxito limitado a expensas de aumentar la deuda total. El rendimiento de los bonos, dicen los analistas financieros, indica que el mercado estima en un 90 por ciento la probabilidad de un default dentro de los próximos cinco años⁶⁹.

Quizás el mayor problema del gobierno en el 2017 sea su necesidad de divisas. Incluso China, que ha aportado unos \$60 mil millones desde el 2007, es reacia a seguir rescatando a un gobierno que no muestra indicio alguno de implementar las urgentes reformas económicas que se necesitan, y cuya viabilidad política está en duda⁷⁰. Asimismo, la Constitución no permite al gobierno endeudarse sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Si bien el TSJ dictaminó la legalidad del presupuesto del 2017 sin autoridad parlamentaria, es improbable que los tribunales internacionales estimen los reclamos de los acreedores por el pago de deuda no autorizada, lo que reduce el atractivo de las ofertas de bonos venezolanos⁷¹. Este es un poderoso factor a favor de algún tipo de acuerdo político en el 2017.

B. *La emergencia social*

Al contrario de muchos de los países de la región que han experimentado hiperinflación, Venezuela no cuenta con un sistema de indexación salarial. Muchos empleados ganan el salario mínimo, pero según un grupo de investigación independiente, en octubre se necesitaban catorce salarios mínimos para comprar alimentos básicos

⁶⁷ World Economic Outlook, International Monetary Fund, octubre de 2016.

⁶⁸ A. Vargas, “Pérez Abad estimó importaciones no petroleras 2016 en apenas \$15 millardos”, *elcambur.com*, 12 de marzo de 2016.

⁶⁹ Sebastian Boyd y Nathan Crooks, “Venezuela’s PDVSA Sows Payment Doubts While Extending Swap”, *Bloomberg*, 17 de octubre de 2016.

⁷⁰ Kejal Vyas, “China Rethinks Its Alliance With Reeling Venezuela”, *The Wall Street Journal*, 11 de septiembre de 2016.

⁷¹ José Ignacio Hernández, “Que significa que la Sala Constitucional y no la Asamblea Nacional apruebe el presupuesto 2017?”, *prodavinci.com*, 12 de octubre de 2016.

para una familia de cinco en Caracas. El costo había aumentado en un 632 por ciento en un año. Con base a la tasa de cambio del mercado negro, el salario mínimo mensual apenas supera los \$6⁷². En la capital y alrededor del país, es común ver a personas rebuscando la basura en busca de alimentos. El hambre ha aumentado drásticamente. Las muertes por desnutrición, no reconocidas por el gobierno, están aumentando tanto en niños como en adultos. Entre enero y mayo del 2016, el número de personas que sufrían desnutrición aumentó del 13,4 por ciento al 23 por ciento de la población, según un experto en nutrición de la Fundación Bengoa⁷³.

Pero la emergencia social no es en absoluto una simple cuestión de hambre y penurias físicas. Un número desconocido de personas han muerto debido a la falta de medicamentos esenciales, equipamiento o servicios médicos. El sistema de salud pública está próximo al colapso⁷⁴. Enfermedades que habían sido erradicadas o controladas están volviendo en forma de epidemias. El gobierno, sin embargo, niega que haya una crisis y amenaza o castiga a quienes protestan. Un informe de Human Rights Watch halló que la mortalidad materna en los primeros cinco meses del 2016 fue un 79 por ciento más elevada que en el mismo periodo en el 2009, el último para el cual se dispone de cifras oficiales. La mortalidad infantil aumentó en un 45 por ciento en el 2013. El personal médico supuestamente fue amenazado con el despido si alzaban la voz, mientras que los ciudadanos comunes que protestaban se exponían a ser golpeados, arrestados e incluso juzgados por tribunales militares⁷⁵.

Quienes han intentado traer ayuda médica del extranjero la han visto bloqueada por el gobierno. En noviembre las autoridades confiscaron un cargamento de medicamentos y suplementos nutricionales perteneciente a la ONG católica Cáritas que había llegado en agosto desde Chile. La aduana dijo que Cáritas no había presentado

⁷² “Reporte Mensual ‘Canasta Básica de Alimentos, Bienes y Servicios’ Oct 2016”, Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA), 30 de noviembre de 2016. El último aumento en el salario mensual, a Bs 27.091, (\$6,37 a la tasa del mercado negro el 10 de diciembre) fue decretado por el presidente Maduro el 27 de octubre. Se entregan cupones de alimentos adicionales por valor de Bs 63.720 (\$14,98 a la tasa del mercado negro el 10 de diciembre) a los adultos en edad de trabajar.

⁷³ Según el profesor Luis Pedro España del Proyecto Pobreza de la Universidad Católica (UCAB) de Caracas, el 8% de los venezolanos admiten haber rebuscado la basura en busca de alimentos. Daniel Pardo, “Cuánta hambre hay realmente en la Venezuela de la ‘crisis alimentaria’?”, BBC Mundo, 21 de abril de 2016. Mariel Lozada, “Victimas del hambre: desnutrición infantil ha cobrado tres vidas” y “Desnutrición, escasez y fallas de estructura amenazan a la niñez”, Efecto Cocuyo, 26 de agosto y 29 de noviembre de 2016. Sabrina D’Amore, “Desnutrición aumentó 12% en cinco meses a causa de la inflación y la escasez”, Runrunes, 30 de junio del 2016.

⁷⁴ En junio de 2016, el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana dijo que el 85 por ciento de los medicamentos que deberían estar disponibles en las farmacias estaban en falta o eran difíciles de conseguir. Una encuesta de doctores halló que a más de tres cuartas partes de los hospitales públicos les faltaban medicamentos básicos. Nicholas Casey, “Dying Infants and No Medicines: Inside Venezuela’s Failing Hospitals”, *The New York Times*, 15 de mayo de 2016.

⁷⁵ Una de las últimas enfermedades en reaparecer es la difteria: José Poito, “Brote de difteria se ha expandido por seis estados en dos meses”, Notiminuto, 30 de noviembre de 2016. El gobierno no ha publicado un boletín epidemiológico mensual desde fines del 2014. La ministra de Relaciones Exteriores Delcy Rodríguez dijo al Consejo Permanente de la OEA en junio que no había “ninguna crisis humanitaria [en Venezuela]”. El gobierno ha dicho que las afirmaciones acerca de una crisis humanitaria y los pedidos de ayuda humanitaria son una pantalla para la intervención extranjera. Maira Ferreira, “Delcy Rodríguez: En Venezuela no hay crisis humanitaria”, *El Universal*, 23 de junio de 2016. “Humanitarian crisis in Venezuela: severe medical and food shortages, inadequate and repressive government response”, Human Rights Watch, 24 de octubre de 2016.

la documentación pertinente. Cáritas y la Iglesia Católica negaron esto, e instaron a que se abordara la ayuda humanitaria en las negociaciones entre el gobierno y la oposición. El 30 de noviembre, un médico y un trabajador del hospital de Magallanes de Catia en Caracas fueron arrestados por agentes del Sebin después de que aceptaran una donación de suministros médicos de una organización liderada por la esposa del preso político Leopoldo López⁷⁶.

C. *El chavismo después del 10 de enero*

Gracias al artículo 233 de la Constitución, el cargo de vicepresidente resulta particularmente atractivo para los políticos ambiciosos al comienzo del quinto año de un mandato presidencial. Al contrario que muchos países con un sistema presidencial, Venezuela no elige a sus vicepresidentes: son designados como miembros ordinarios del gabinete. Si el presidente muere, renuncia o es destituido durante los dos últimos años del mandato de seis años, el vicepresidente lo reemplaza por el resto del mandato y está bien situado para buscar ser elegido presidente por derecho propio.

Ya ha habido muestras apenas encubiertas de interés en el cargo por parte de algunos líderes. El 29 de septiembre, el gobernador del estado de Carabobo, Francisco Ameliach, sugirió que Maduro podría nombrar a Diosdado Cabello para el cargo, aunque lo dijo con la intención aparente de desalentar a la oposición de buscar un referéndum revocatorio más allá del 10 de enero⁷⁷. Al día siguiente, el miembro de la Asamblea Nacional y ex vicepresidente Elías Jaua, uno de los miembros del círculo íntimo de Maduro, dijo a una agencia de noticias ecuatoriana que el liderazgo apoyaba la reelección del presidente, una declaración que se entendió como una respuesta a Cabello y Ameliach⁷⁸. Unos días después, Maduro usó su programa televisivo semanal (“Contacto con Maduro”) para respaldar al actual vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, otro civil de izquierda. En términos algo ambiguos, habló de entregar a Istúriz la responsabilidad que Chávez le había otorgado antes de su muerte⁷⁹.

Cabello se embarcó en una gira intensiva a mediados del 2016 que lo llevó a casi todos los estados (y cuarteles militares), lo que llevó a algunos comentaristas a sugerir que estaba haciendo campaña presidencial. Pero las encuestas indican que su mensaje de línea dura y personalidad abrasiva no son populares⁸⁰. Tanto Maduro como Jaua, así como el gobernador del estado de Aragua, Tareck el Aissami – otra figura que, según se rumorea, tendría ambiciones presidenciales – cuentan con

⁷⁶ Comunicado, Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela y Caritas Venezuela, 25 de noviembre de 2016. Diego A Torrealba, “Sebin detuvo a médico y sindicalista en Hospital de los Magallanes de Catia por recibir donación de insumos médicos”, El Pitazo, 1 de diciembre de 2016.

⁷⁷ “Maduro nombraría a Diosdado Cabello vicepresidente”, *El Nacional*, 4 de octubre de 2016.

⁷⁸ Eligio Damas, “Elías Jaua vuelve a confrontar a Diosdado, esta vez por la candidatura”, *aporrrea.org*, 30 de septiembre de 2016. Jaua pertenece a la izquierda radical civil del movimiento chavista, la cual a menudo choca con el ala militar. Tiene estrechos lazos con el Frente Francisco de Miranda, una organización armada, entrenada por Cuba, que se dice cuenta con 20.000 militantes por todo el país.

⁷⁹ “Nicolás Maduro pone su confianza en Aristóbulo Istúriz”, *Notitarde*, 5 de octubre de 2016.

⁸⁰ El programa televisivo semanal de Cabello se llama “Con el mazo dando”.

mejores números⁸¹. El hecho de que todos los potenciales sucesores dentro del PSUV sean tanto o más impopulares que Maduro podría desalentar a aquellos que pudieran buscar reemplazarlo. Cualquiera que aspire al cargo además requerirá, como mínimo, la aquiescencia de las fuerzas armadas. Muchos oficiales que se graduaron con Cabello y participaron con él en el fallido intento de golpe de Chávez en 1992 son ahora generales de alto rango, pero no se puede dar por hecho el apoyo de la mayoría en los cuarteles. Al contrario que Chávez, Maduro no ha logrado ejercer plenamente su autoridad sobre las facciones de las FANB, aunque, con la posible excepción del actual ministro de Defensa, tampoco lo ha hecho nadie más⁸².

D. *Perspectivas de una salida negociada*

Parece improbable que la forma actual de las negociaciones entre el gobierno y la oposición, auspiciadas por el Vaticano y UNASUR, prospere. La próxima reunión plenaria está prevista para el 13 de enero, pero la MUD no asistió a la última, el 6 de diciembre, y ha dicho que no participará en negociaciones hasta que el gobierno cumpla los compromisos que ya ha adquirido⁸³. Su postura se vio fortalecida por la divulgación de una carta a Maduro, con fecha del 2 de diciembre, del Cardenal Parolin, en la que el Vaticano expresaba “dolor y preocupación” acerca de la falta de avances en las negociaciones y exigía el cumplimiento de cuatro acuerdos. Estos eran: medidas para abordar la crisis humanitaria; el establecimiento de un cronograma electoral; la restauración de la autoridad de la Asamblea Nacional, y la liberación de los presos políticos⁸⁴. El gobierno respondió con una carta pública de Jorge Rodríguez en la que rechazaba de pleno las demandas del Vaticano y acusaba a Parolin de violar los términos de la misión de facilitación. Rodríguez descarta cualquier cambio en el calendario electoral⁸⁵. Hay elementos dentro de la MUD que estarían dispuestos a esperar hasta las elecciones programadas para diciembre del 2018 antes de reemplazar a Maduro en los dos últimos años de su mandato y después enfrentarse a un electorado que bien podría estar frustrado por la lentitud del cambio⁸⁶. Pero es políticamente imposible decir esto públicamente, dada la desesperación que sienten muchos simpatizantes por un cambio de gobierno inmediato.

No obstante ninguna de las dos partes ha abandonado formalmente las negociaciones y la que primero lo hiciera pagaría un costo político, en particular dada la presencia del Vaticano, con su considerable autoridad moral. En especial la MUD, que dio tanta importancia a la intervención del Papa Francisco, podría tomarse en serio la amenaza de que si las negociaciones se derrumban y el Vaticano abandona, no será fácil convencerlo de que vuelva. El problema de la MUD, sin embargo, es cómo defender su participación en negociaciones que prácticamente no han producido

⁸¹ Véase, por ejemplo, la encuesta Venebarómetro de julio de 2016, en la que tres cuartas partes de los encuestados dijeron que no confiaban en Cabello: Luz Mely Reyes, “Cinco datos de la encuesta de Venebarómetro para tomar en cuenta”, Efecto Cocuyo, 24 de julio de 2016.

⁸² Entrevista de Crisis Group, experto en seguridad y defensa, Caracas, 21 de noviembre de 2016.

⁸³ “Si el régimen no cumple, MUD no asistirá al diálogo el 6D”, comunicado de la MUD, 2 de diciembre de 2016.

⁸⁴ Emiliana Duarte, “Parolin’s Letter”, Caracas Chronicles, 7 de diciembre de 2016.

⁸⁵ Christian Colina, “Guerra de cartas: Rodríguez arremetió contra la iglesia por críticas al diálogo”, Caraota Digital, 9 de diciembre de 2016.

⁸⁶ Entrevista de Crisis Group, analista político, 21 de noviembre de 2016.

resultados tangibles, más allá de la liberación de siete presos opositores, contra las voces de su coalición que expresan públicamente su resistencia. Si el diálogo puede de algún modo mantenerse, o reanudarse si se derrumba, el factor más decisivo probablemente será la crisis económica y financiera, para la cual no hay perspectivas de hallar una solución sin un acuerdo. El tener presente las probables consecuencias – un default caótico, una explosión social, un golpe militar o una combinación de las tres – podría finalmente afilar las mentes de los negociadores.

V. Conclusión

Venezuela necesita urgentemente una solución a una crisis que ha exacerbado la polarización política y ha perjudicado los medios de sustento y el bienestar de la mayoría de sus ciudadanos. El gobierno de Maduro ha proporcionado poco más que paliativos: millones no tienen suficiente para comer, mientras que miles están muriendo innecesariamente debido a la escasez de medicamentos y asistencia sanitaria básica. La profunda impopularidad del gobierno resultó en una victoria aplastante para la coalición opositora en las elecciones parlamentarias hace un año, pero en cambio de escuchar la voz del electorado, el gobierno se negó a buscar una posición moderada. Eligió anular el resultado erigiendo barreras institucionales, en ocasiones físicas, en torno a la Asamblea Nacional, endureció su discurso revolucionario y pisoteó las normas legales y constitucionales en un intento de recuperar la hegemonía perdida.

La oposición respondió buscando un referéndum revocatorio contra el presidente y un cambio de gobierno anticipado. Una vez más, Maduro hizo uso de su control institucional, postergando, bloqueando y finalmente suspendiendo la campaña del referéndum, a pesar de que había claros indicios de que representaba la voluntad de la mayoría. El referéndum revocatorio distaba de ser una solución ideal: una elección presidencial anticipada que resultara en un repentino cambio de gobierno hubiera conllevado un grave riesgo de inestabilidad dado el control del chavismo sobre la industria petrolera, el aparato estatal, la economía y las fuerzas armadas. Pero era constitucional, democrático y potencialmente la opción menos mala.

Muchos ahora tienen las esperanzas puestas en las elecciones presidenciales del 2018. Con dos años de su mandato aún restantes, sin embargo, el presidente Maduro y sus ministros parecen incapaces de evitar el colapso económico y una crisis humanitaria aún más profunda. Si bien un golpe militar en el sentido clásico parece poco probable, hay una fuerte posibilidad de que las fuerzas armadas ejercerán progresivamente más control. Para restaurar el Estado de derecho y evitar mayor sufrimiento, un acuerdo con la oposición es esencial y solo puede lograrse con ayuda internacional. Idealmente, un gobierno interino que represente a ambas partes implementaría urgentes reformas económicas y restauraría la independencia y profesionalismo del poder judicial y la autoridad electoral para así garantizar unas elecciones libres y justas en el 2018. El proceso de facilitación liderado por el Vaticano y UNASUR es un comienzo, pero para lograr el éxito se necesitará una estructura más robusta que cuente con procedimientos de verificación internacional de los acuerdos, así como aportes de la sociedad civil y expertos técnicos externos.

Caracas/Bogotá/Bruselas, 16 de diciembre del 2016

Anexo A: Mapa de Venezuela



Appendix B: Acerca de International Crisis Group

El International Crisis Group (Crisis Group) es una organización no gubernamental independiente sin ánimo de lucro, con cerca de 120 funcionarios en cinco continentes, que combina el análisis sobre el terreno con labores de sensibilización al más alto nivel, con el objetivo de prevenir y solucionar conflictos graves.

El trabajo de Crisis Group se basa en investigaciones realizadas sobre el terreno. Cuenta con equipos de analistas políticos con sede en o cerca de los países en riesgo de crisis, escalada o recurrencia de conflictos violentos. Con base en la información y las evaluaciones sobre el terreno, produce informes analíticos con recomendaciones prácticas dirigidas a quienes toman decisiones fundamentales en el ámbito internacional. Crisis Group también publica *CrisisWatch*, un boletín mensual de alerta temprana, que actualiza sucintamente y con regularidad la coyuntura en más de 70 situaciones de conflicto o conflicto potencial alrededor del mundo.

Los informes y los informes breves de Crisis Group son ampliamente distribuidos por correo electrónico y se publican simultáneamente en el sitio web de la organización, www.crisisgroup.org. Crisis Group trabaja en estrecha colaboración con gobiernos y con grupos influyentes, incluidos los medios, para llamar la atención sobre sus análisis de crisis y buscar apoyo para sus recomendaciones en material de políticas.

El Consejo de Administración de Crisis Group –cuyos miembros incluyen figuras prominentes en las esferas de la política, la diplomacia, los negocios y los medios de comunicación– participa de forma directa en la promoción de los informes y recomendaciones de la organización, buscando su consideración por parte de formuladores de políticas en el mundo. Crisis Group es dirigido por el ex Subsecretario General de las Naciones Unidas y ex Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Lord Mark Malloch-Brown. Su Vicepresidente es Ayo Obe, abogado, columnista y presentador de TV en Nigeria.

El Presidente y Director Ejecutivo de Crisis Group, Jean-Marie Guéhenno, fue Subsecretario General de las Naciones Unidas para Operaciones de Mantenimiento de la Paz entre 2000-2008, y en 2012 Enviado Especial Adjunto de las Naciones Unidas y de la Liga de Estados Árabes en Siria. Dejó su puesto como Enviado Especial Adjunto para presidir la comisión que preparó el libro blanco sobre defensa y seguridad nacional francesa en 2013. La sede internacional de Crisis Group se encuentra en Bruselas, y la organización cuenta con oficinas o representación en 9 localidades: Biskek, Bogotá, Dakar, Estambul, Islamabad, Londres, Nairobi, Nueva York y Washington DC. También tiene representación de personal en las siguientes ciudades: Bangkok, Beirut, Caracas, Ciudad de Guatemala, Ciudad de México, Delhi, Dubái, Gaza, Jerusalén, Johannesburgo, Kabul, Kiev, Pekín, Rabat, Rangún, Sídney y Túnez.

Crisis Group recibe apoyo financiero de una amplia gama de gobiernos, fundaciones y fuentes privadas. En la actualidad Crisis Group tiene relaciones con los siguientes departamentos y organismos gubernamentales: Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional, Agencia Austriaca para el Desarrollo, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, Cooperación Irlandesa para el Desarrollo, Departamento Canadiense de Asuntos Exteriores y de Comercio Internacional, Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda, Ministerio de Relaciones Exteriores de Luxemburgo, Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda, Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Suiza, y Principado de Liechtenstein.

Crisis Group además mantiene relaciones con las siguientes fundaciones: Carnegie Corporation of New York, Henry Luce Foundation, Humanity United, John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, Koerber Foundation, Open Society Foundations, Open Society Initiative for West Africa, Ploughshares Fund, Rockefeller Brothers Fund, y Tinker Foundation.

Diciembre de 2016

Anexo C: Informes e informes breves de Crisis Group sobre América Latina y el Caribe desde 2013

Informes especiales

Exploiting Disorder: al-Qaeda and the Islamic State, Informe Especial, 14 de marzo de 2016 (También disponible en árabe).

Seizing the Moment: From Early Warning to Early Action, Informe Especial N°2, 22 de junio de 2016.

Governing Haiti: Time for National Consensus, Informe sobre América Latina y el Caribe N°46, 4 de febrero de 2013.

Tonicapán: tensión en las tierras indígenas de Guatemala, Informe sobre América Latina N°47, 6 de febrero de 2013.

El desafío de Peña Nieto: los cárteles criminales y el Estado de Derecho en México, Informe sobre América Latina N°48, 19 de marzo de 2013.

Venezuela: una casa dividida, Informe breve sobre América Latina N° 28, 16 de mayo de 2013.

Justicia en el cañón de un arma: las milicias civiles en México, Informe breve sobre América Latina N° 29, 28 de mayo de 2013.

Justicia transicional y los diálogos de paz en Colombia, Informe sobre América Latina N°49, 29 de agosto de 2013.

Justicia a prueba en Guatemala: el caso Ríos Montt, Informe sobre América Latina N°50, 23 de septiembre de 2013.

¿Abandonado a su suerte? El ELN y los diálogos de paz en Colombia, Informe sobre América Latina N°51, 26 de febrero de 2014.

Venezuela: punto de quiebre, Informe breve sobre América Latina N°30, 21 de mayo de 2014.

Corredor de violencia: la frontera entre Guatemala y Honduras, Informe sobre América Latina N°52, 4 de junio de 2014.

Venezuela: inercia peligrosa, Informe breve sobre América Latina N°31, 23 de septiembre de 2014.

El día después de mañana: las FARC y el fin del conflicto en Colombia, Informe sobre América Latina N°53, 11 de diciembre de 2014.

Ciudad Juárez: ¿Transitando del abismo a la redención?, Informe sobre América Latina N°54, 25 de febrero de 2015.

En la cuerda floja: la fase final de las conversaciones de paz en Colombia, Informe breve sobre América Latina N°32, 2 de julio de 2015.

Venezuela: un desastre evitable, Informe breve sobre América Latina N°33, 30 de julio de 2015.

Justicia denegada: desaparecidos en Guerrero, México, Informe sobre América Latina N°55, 23 de octubre de 2015.

Fin de la hegemonía: ¿Qué sigue para Venezuela?, Informe breve sobre América Latina N°34, 21 de diciembre de 2015.

¿De bastón a catalizador?: la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Informe sobre América Latina N° 56, 29 de enero de 2016.

Venezuela: al borde del precipicio, Informe sobre América Latina N°35, 23 de junio de 2016.

Presa fácil: violencia criminal y migración en Centroamérica, Informe de Crisis Group sobre América Latina N°57, 28 de julio de 2016.

Últimos pasos hacia el fin de la guerra en Colombia, Informe sobre América Latina N°58, 7 de septiembre de 2016.

Anexo D: Consejo de administración de International Crisis Group

CO-PRESIDENTE

Lord (Mark) Malloch-Brown
Ex Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas y Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO

Jean-Marie Guéhenno
Ex Subsecretario General de las Naciones Unidas para Operaciones de Mantenimiento de la Paz

VICE-PRESIDENTE

Ayo Obe
Presidente de la junta de Gorée Institute (Senegal)

OTROS MIEMBROS DEL CONSEJO

Fola Adeola
Fundador y presidente, FATE Foundation

Ali al Shihabi
Autor; fundador y ex presidente del Rasmala Investment bank

Celso Amorim
Ex Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil; Ex Ministro de Defensa

Hushang Ansary
Presidente, Parman Capital Group LLC

Nahum Barnea
Columnista político, Israel

Kim Beazley
Presidente nacional, Insituto Australiano de Asuntos Internacionales; Ex Primer Ministro Adjunto de Australia y Embajador en los Estados Unidos

Carl Bildt
Ex Ministro de Relaciones Exteriores de Suecia

Emma Bonino
Ex Ministra de Relaciones Exteriores de Italia y Vicepresidenta del Senado, Ex Comisionada Europea para la Ayuda Humanitaria

Lakhdar Brahimi
Miembro, The Elders; Diplomático de Naciones Unidas; Ex Ministro de Relaciones Exteriores de Argelia

Cheryl Carolus
Ex Alta Comisionada de Sudáfrica ante el Reino Unido; ex Secretaria General del Congreso Nacional Africano (ANC)

Maria Livanos Cattau
Ex Secretaria General de la Cámara Internacional de Comercio

Wesley Clark
Ex Comandante Supremo Aliado de la OTAN

Sheila Coronel
Profesora Toni Stabile de prácticas de periodismo investigativo; Directora del Centro Toni Stabile para el Periodismo Investigativo, Universidad de Columbia, Estados Unidos

Frank Giustra
Presidente y Director Ejecutivo, Fiore Financial Corporation

Mo Ibrahim
Fundador y Presidente de Mo Ibrahim Foundation; fundador de Celtel International

Wolfgang Ischinger
Presidente, Munich Security Conference; Ex Vice Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania y Embajador ante Reino Unido y Estados Unidos

Asma Jahangir
Ex Presidenta del Colegio de Abogados de la Corte Suprema de Pakistán; ex Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad Religiosa o de Creencias

Yoriko Kawaguchi
Ex Ministro de Asuntos Exteriores, Japón

Wadah Khanfar
Cofundador, Al Sharq Forum; ex Director General, Al Jazeera Network

Wim Kok
Ex Primer Ministro de los Países Bajos

Andrey Kortunov
Director General del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales; Presidente de la New Eurasia Foundation en Moscú

Ivan Krastev
Presidente del Centro para Estrategias Liberales; miembro fundador de la junta del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores

Ricardo Lagos
Ex Presidente de Chile

Joanne Leedom-Ackerman
Ex Secretaria Internacional de PEN International; novelista y periodista, Estados Unidos

Helge Lund
Ex director ejecutivo de BG Group Limited ynd Statoil ASA

Shivshankar Menon
Ex Secretario de Exteriores de India; Ex Asesor Nacional de Seguridad

Naz Modirzadeh
Director del programa de Derecho Internacional y Conflicto Armado de la Escuela de Derecho de Harvard

Saad Mohseni
Presidente y Director Ejecutivo de MOBY Group

Marty Natalegawa
Ex Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia; Representante permanente ante la ONU; Ex embajador en Reino Unido

Roza Otunbayeva
Ex presidente de Kirguistán; Ex Ministro de Asuntos Exteriores Former President of Kyrgyzstan; Former Minister of Foreign Affairs

Thomas R Pickering
Ex Embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Rusia, India, Israel, Jordania, El Salvador y Nigeria

Olympia Snowe
Ex Senadora de los Estados Unidos y miembro de la Cámara de Representantes

Javier Solana
Presidente, Centro ESADE para la Economía Global y Geopolítica; Miembro Distinguido, The Brookings Institution

George Soros
Fundador, Open Society Foundations y Presidente, Soros Fund Management

Pär Stenbäck
Ex Ministro de Relaciones Exteriores y de Educación, Finlandia. Presidente del Parlamento Cultural Europeo

Jonas Gahr Støre
Líder del Partido Noruego de los Trabajadores, Ex Ministro de Relaciones Exteriores

Lawrence H. Summers
Ex Director del Consejo Económico Nacional de los Estados Unidos y ex Secretario del Tesoro de EEUU; Presidente emérito de la Universidad de Harvard

Helle Thorning-Schmidt
Director Ejecutivo de Save the Children International; Ex Primer Ministro de Dinamarca

Wang Jisi
Miembro, Comité Asesor en Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Ex Rector, Escuela de Estudios Internacionales, Peking University

CONSEJO DEL PRESIDENTE

Es un distinguido grupo de donantes particulares y corporativos que brindan apoyo esencial y experticia a Crisis Group.

CORPORATIVO	INDIVIDUAL	
BP	(5) Anónimos	Herman De Bode
Shearman & Sterling LLP	Scott Bessent	Reynold Levy
Statoil (U.K.) Ltd.	David Brown & Erika Franke	Alexander Soros
White & Case LLP	Stephen & Jennifer Dattels	

CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL

Donantes particulares y corporativos que juegan un papel central en los esfuerzos de Crisis Group para prevenir conflictos graves.

CORPORATIVO	INDIVIDUAL	
APCO Worldwide Inc.	(2) Anónimos	Rita E. Hauser
Atlas Copco AB	Mark Bergman	Geoffrey R. Hoguet & Ana Luisa Ponti
BG Group plc	Stanley Bergman & Edward Bergman	Geoffrey Hsu
Chevron		Faisal Khan
Edelman UK	Elizabeth Bohart	Cleopatra Kitti
HSBC Holdings plc	Neil & Sandra DeFeo Family Foundation	Virginie Maisonneuve
MetLife		Dennis Miller
Shell	Sam Englehardt	Kerry Propper
Yapı Merkezi Construction and Industry Inc.	Neemat Frem	Nina K. Solarz
	Seth & Jane Ginns	
	Ronald Glickman	

CONSEJO EMBAJADOR

Jóvenes talentos de diversos campos que contribuyen con sus habilidades y experticia para apoyar la misión de Crisis Group.

Luke Alexander	Beatriz Garcia	Rahul Sen Sharma
Gillea Allison	Lynda Hammes	Leeanne Su
Amy Benziger	Matthew Magenheimer	AJ Twombly
Tripp Callan	Madison Malloch-Brown	Dillon Twombly
Victoria Ergolavou	Peter Martin	Grant Webster
Christina Bache Fidan	Megan McGill	

ASESORES SENIOR

Ex miembros del Consejo de Administración que mantienen una relación con Crisis Group y a quienes se recurre ocasionalmente en busca de apoyo y asesoría (en la medida en que sean consistentes con cualquier otro cargo que puedan estar desempeñando en ese momento).

Martti Ahtisaari Presidente Emérito	Zbigniew Brzezinski Kim Campbell	James V. Kimsey Aleksander Kwasniewski
George Mitchell Presidente Emérito	Jorge Castañeda Naresh Chandra	Todung Mulya Lubis Allan J. MacEachen
Gareth Evans Presidente Emérito	Eugene Chien Joaquim Alberto Chissano	Graça Machel Jessica T. Mathews
Kenneth Adelman Adnan Abu-Odeh	Victor Chu Mong Joon Chung	Barbara McDougall Matthew McHugh
SAR Príncipe Turki al-Faisal Óscar Arias	Pat Cox Gianfranco Dell'Alba	Miklós Németh Christine Ockrent
Ersin Arıoğlu Richard Armitage	Jacques Delors Alain Destexhe	Timothy Ong Olara Otunnu
Diego Arria Zainab Bangura	Mou-Shih Ding Uffe Ellemann-Jensen	Lord (Christopher) Patten Victor Pinchuk
Shlomo Ben-Ami Christoph Bertram	Gernot Erlor Marika Fahlén	Surin Pitsuwan Fidel V. Ramos
Alan Blinken Lakhdar Brahimi	Stanley Fischer Carla Hills	
	Swanee Hunt	